

Agricultura y trabajo rural en la globalización

MANUEL DELGADO CABEZA (*)

LINA GAVIRA ÁLVAREZ (**)

El presente trabajo consta de dos partes. En la primera se sintetizan las tendencias de la evolución de la agricultura en los últimos quinquenios. Una evolución en la que la agricultura se articula como un primer eslabón dentro de la dinámica del sistema agroalimentario. En la segunda parte, después de algunas consideraciones sobre los límites de la categoría mercado de trabajo rural, se analizan las tendencias dominantes en la actividad y las condiciones laborales en las zonas rurales, para terminar el trabajo con el planteamiento de algunas propuestas políticas.

1. LA AGRICULTURA, EN EL CAMINO DE LA «DESLOCALIZACIÓN»

En los sistemas agrarios tradicionales, la agricultura es una actividad fuertemente «localizada» –arraigada en lo local–, de modo que el manejo de estos sistemas se vincula, en cada lugar, a estrategias de reproducción asociadas a un conocimiento de las prácticas agrícolas, y del medio físico y biológico, resultado de la interacción entre comunidad y entorno natural. Una interacción en consonancia con el propósito social de autosubsistencia y el predominio de valores de uso, que procura la biodiversidad y la heterogeneidad espacial (topodiversidad), y que, junto con una amplia variedad de recursos en juego utilizados para fines diversos, contribuyen a mantener y reproducir la base natural de la que se depende. La provisión alimentaria

(*) *Departamento de Economía Aplicada II. Universidad de Sevilla.*

(**) *Departamento de Sociología. Universidad de Sevilla.*

- Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 211, 2006 (21-61).

se resuelve así desde formas de diversidad cultural, experiencias y modos de organización generados y gestionados *in situ*. Proximidad y alto grado de integración entre cultura, naturaleza y sociedad serán las coordenadas en las que se desenvuelve la actividad agroalimentaria en estas comunidades locales (Gómez Benito 1995, Toledo, 1993).

Con la llegada de la industrialización, los agroecosistemas fueron orientados desde los requerimientos del consumo doméstico a los del mercado, experimentando la agricultura profundas transformaciones cuyo hilo conductor, el proceso de modernización, puede identificarse a partir de tres denominadores comunes:

- a) La progresiva «industrialización» de la actividad agraria, reflejada, no sólo en la demanda creciente de *inputs* industriales, o en la orientación cada vez mayor hacia la transformación agroalimentaria, sino también en la adopción, en el interior de la propia actividad agraria, de esquemas y principios de racionalidad propios de la organización industrial.
- b) Al mismo tiempo, la agricultura se inserta, como un eslabón cada vez con menor poder, en la cadena de valor de un sistema agroalimentario cuyo funcionamiento condiciona de manera creciente la dinámica del sector agrario. Las tendencias y características de este sistema aparecen, a su vez, progresivamente ligadas a los imperativos del crecimiento y la acumulación dentro del sistema económico vigente, aunque el funcionamiento de este sistema agroalimentario esté condicionado por algunas particularidades que lo definen de manera específica y lo diferencian de otros sistemas de provisión. Entre ellas se ha hecho hincapié en señalar el peso que en su comportamiento poseen los factores orgánicos o biológicos, y, especialmente, la significación crucial de estos factores en los dos extremos de la cadena –la producción agraria y el consumo alimentario– (Goodman y Redclift, 1991). Un condicionante del que no se sigue que el funcionamiento del sistema agroalimentario esté determinado por sus características orgánicas a expensas de otros factores, pero sí que nos encontramos en un ámbito en el que las relaciones entre lo social y lo natural adquieren connotaciones especialmente relevantes.
- c) De ahí, y este sería el tercero de los denominadores comunes a los que nos referíamos antes, los intentos permanentes por alejar los límites que pesan tanto sobre la producción agraria como sobre el consumo alimentario, en mercados con una capacidad de expansión también «naturalmente» limitada. Estas «estrategias» para

alejarse o romper restricciones se han canalizado a través de modificaciones tecnológicas que influyen en los procesos biológicos y en la valorización de los productos agrarios, utilizando inputs externos y alargando la cadena alimentaria (Whatmore, 1995). Todo ello ha dado lugar a un amplio conjunto de actividades conectadas con la agricultura, hacia atrás y hacia delante, y asociadas a su vez a estructuras empresariales relacionadas con la división del trabajo a través del mercado que conforman, dentro del sistema agroalimentario, lo que algunos autores han recogido, a efectos de análisis, bajo la denominación de subsistemas de aprovisionamiento (Fine, Heasman y Wrigth, 1996).

Las diferentes etapas por las que ha atravesado el sistema agroalimentario, y dentro de él la agricultura, pueden encajarse dentro de los modos de organización y los procesos de acumulación seguidos por el sistema económico en su conjunto (Friedman y McMichael, 1989). En este contexto, la etapa que precede a la globalización –1940/1980– viene caracterizada por la vigencia, en los países industrializados o centrales, de un modelo que centra la dinámica de los procesos de crecimiento y acumulación dentro de las fronteras estatales. En este ámbito se desenvuelve la regulación de unas relaciones salariales estables garantizadas a través de inversiones que sostienen la producción en masa, el pleno empleo y el crecimiento del consumo; los países periféricos pretenderán replicar este modelo de modernidad como forma de acortar distancias.

En el sistema agroalimentario, asistimos en este período a una creciente separación entre producción y consumo, condicionada por dos tendencias que se relacionan entre sí. Por una parte, la orientación de la producción agraria hacia el mercado, y, por otra, el desplazamiento de la fuente de aprovisionamiento de productos alimentarios, de manera progresiva, desde la agricultura hacia la industria agroalimentaria. Las innovaciones en los sistemas de transportes y comunicaciones, junto con algunas técnicas que limitan el carácter perecedero de los alimentos, facilitan la posibilidad de transformar los productos agrarios, que acrecientan su carácter de «materia prima» sometida a un grado de elaboración cada vez mayor. Este sistema de producción, crecientemente penetrado por el capital, se traduce en una producción estandarizada de alimentos para atender al consumo de masas –homogeneización de los bienes salario–, alcanzándose un alto grado de autoabastecimiento alimentario barato en los países industrializados, objetivo básico para facilitar el crecimiento y la acumulación dentro de sus fronteras. El papel de los Estados en la regulación de las con-

diciones sociales en las que se desenvuelve esta acumulación, mediante la provisión de subvenciones, facilidades de acceso al crédito y otras ayudas, será una pieza fundamental en el funcionamiento de un modelo que permitió e hizo compatible la creación y el desarrollo de grandes empresas alimentarias, el sostenimiento de los niveles de ingresos de los agricultores y el desempeño por parte de los gobiernos de su papel dentro del «Estado del bienestar».

El paso de un sistema alimentario apoyado básicamente en ingredientes locales y perecederos a otro basado en un conjunto de bienes ampliamente mercantilizados y manufacturados, de productos de mayor duración, hay que contextualizarlo en medio de cambios muy importantes en otros ámbitos, entre los cuales, los intensos procesos de urbanización, la incorporación de la mujer a los mercados de trabajo, y la generalización del uso de equipamiento doméstico, provocarán modificaciones esenciales en los hábitos de vida y consumo, desde las que se retroalimentarán y reproducirán las condiciones que fundamentan los procesos de crecimiento económico y de acumulación y su regulación en esta etapa.

La modernización de la agricultura se traduce, en este período, en la generalización en las agriculturas del centro de un paquete tecnológico integrado por semillas «mejoradas» con variedades de «alto rendimiento» o, mejor, de «alta respuesta» a fertilizantes, pesticidas, agua para irrigación y determinadas técnicas agrícolas; estas semillas, concebidas, diseñadas y fabricadas industrialmente, sustituyen a las semillas «autóctonas» en un proceso de simplificación de los agroecosistemas que conlleva una «erosión genética», y una disminución de la biodiversidad, al tiempo que debilita sus mecanismos de reproducción y aumenta su fragilidad (Vernoy, 2003; FAO, 1998). El consumo de inputs industriales –fertilizantes, herbicidas, y otros productos agroquímicos–, y una intensa mecanización y automatización son también ingredientes esenciales que suponen la sustitución de fuentes de aprovisionamiento internas y renovables por energía y materiales no renovables y procedentes de fuera del sector.

Este paquete tecnológico, concebido y diseñado desde las economías centrales, pasó también a ser la norma en una parte creciente de las agriculturas periféricas, de modo que en el llamado Tercer Mundo se pasó de 60.000 hectáreas cultivadas con semillas de alto rendimiento en 1965 a más de 50 millones de hectáreas a finales de los 70 (Myers, 1987). La exportación y los mercados urbanos en expansión fueron el destino mayoritario para los cultivos asociados a esta parte de la agricultura de los países periféricos en los que la modernización, junto con la importación de granos de las agricultu-

ras del Norte, provocaron consecuencias adversas para las estructuras rurales y la seguridad alimentaria, de modo que áreas anteriormente autosuficientes comenzaron a experimentar crecientes niveles de malnutrición, subempleo y pobreza.

Los fuertes incrementos de la productividad alcanzados por esta agricultura industrial supusieron en principio mayores ingresos para los agricultores, pronto contrarrestados por una importante caída de los precios de los productos agrarios, así como por un crecimiento de los gastos de fuera del sector, que incrementó las diferencias de rentas en el medio rural a favor de las grandes explotaciones y supuso la marginación o la expulsión de una parte importante de las pequeñas explotaciones familiares. De otro lado, se consolida en este período la subordinación de la agricultura a las necesidades de los procesos de acumulación que tienen lugar fuera de ella, en gran medida vinculados a territorios urbanos, profundizándose la asimetría en las relaciones entre los ámbitos rural y urbano.

La provisión alimentaria se define y se construye cada vez en mayor medida desde las organizaciones empresariales dominantes en la cadena de valor alimentaria, gobernada en esta etapa desde el eslabón industrial. La modernización de la «revolución verde» entraña, por tanto, una triple separación o «externalización», en el camino de la «deslocalización» de la agricultura en relación con su entorno: se «externalizan» los conocimientos, alejándose el manejo de la actividad agraria de las condiciones locales de adaptación al medio; se separan también de lo local las fuentes de aprovisionamiento que ahora proceden del exterior, a la vez que se aleja progresivamente la localización de los mercados de destino, separándose así la agricultura de las necesidades alimentarias del medio rural próximo; al mismo tiempo, tiene lugar una ruptura o separación entre la comunidad local y la naturaleza, con la que ahora las relaciones pasan a ser de dominio o explotación. La provisión alimentaria en su conjunto se «artificializa» en beneficio de los procesos de crecimiento y acumulación que tienen lugar fuera de la agricultura, bajo un doble proceso, señalado por Goodman y Redclift, (1991) como de *apropiación* de lo local, por un lado, y de *sustitución* por ingredientes industriales, por otro. Durante este período, el paradigma del desarrollo subordina lo rural a la más alta instancia de un industrialismo, cuyas consecuencias revelan los inconvenientes y los costes de la creencia en el inexorable progreso técnico; en este camino, «la alimentación fue arrancada de sus relaciones directas con la ecología local y la cultura para convertirse en un *input* de la dieta urbana y las plantas de procesado industrial» (McMichael, 1998: 21).

El agotamiento del modelo fordista en los 70 se traduce en el sistema agroalimentario en la aparición de excedentes en las agriculturas europea y estadounidense, con la consiguiente búsqueda de salidas en los mercados internacionales. La inestabilidad de los precios agrarios, en una situación de crisis del papel asistencial del estado, el freno a los aumentos de productividad y el descenso en las tasas de rentabilidad, junto con la tensión entre el aumento del poder de las grandes corporaciones alimentarias transnacionales y el ámbito estatal de la acumulación en el régimen fordista, son algunos de los elementos en presencia para explicar la necesidad de encontrar otros modos de funcionamiento que permitieran restaurar mejores condiciones para el crecimiento y la acumulación. Llega la globalización al sistema agroalimentario.

2. DE LOS ESTADOS AUTOSUFICIENTES A LOS ENCLAVES AGROEXPORTADORES

En esta nueva etapa, los procesos de producción, distribución y consumo alimentario se integran por encima de las fronteras estatales; las estrategias de las organizaciones empresariales que modulan la dinámica del sector contemplan ahora tanto la gestión de los recursos como el acceso a los mercados a escala mundial. Se trata no sólo de una extensión cuantitativa de las relaciones mercantiles, sino, sobre todo, de un cambio cualitativo en los modos de organización, condicionado en gran medida por el protagonismo que ahora adquiere el capital financiero (Marsden y Whatmore, 1994); un capital que a la vez que hace posible la concentración, expansión y reorganización de las corporaciones agroalimentarias, modula el funcionamiento del sector desde criterios de «racionalización» contruidos bajo el imperativo de la «creación de valor» financiero; desde esta lógica financiera se ve estimulada la eliminación de restricciones para la localización, el aprovisionamiento, la producción y la distribución agroalimentaria.

En este contexto hay que situar la reestructuración de la agricultura, cuya dinámica sólo puede ser entendida si se tienen en cuenta las tendencias y las fuerzas que la condicionan dentro de un complejo agroalimentario, que participa de los principios del «régimen de acumulación flexible» (Harvey, 1989). Un régimen caracterizado por la eliminación de trabas y rigideces que puedan obstaculizar los procesos de crecimiento y acumulación asociados a los negocios relacionados con el aprovisionamiento alimentario, y en el que las formas organizacionales de los grandes grupos empresariales, –actores que impulsan la dinámica del sistema agroalimentario (Constante y

Hefferman, 1994; Kneen, 1999; Lyson y Lewis, 2000)–, se orientan hacia complejas estructuras, mallas o redes globales asociadas a una cadena crecientemente fragmentada en actividades, establecimientos y procesos fuertemente diferenciados. Densos entramados en los que la profundización en la división del trabajo corre pareja a una creciente capacidad de control, facilitada ahora por el uso de las nuevas tecnologías de la información y a un también creciente poder de las grandes corporaciones para organizar y coordinar estos procesos. La agricultura se ve, así, afectada por estas nuevas formas de organización, de modo que ahora podemos encontrarnos con grandes corporaciones agroalimentarias como Dole, Del Monte, Chiquita u otras, tratando de optimizar sus estructuras de aprovisionamiento, subcontratando la puesta en funcionamiento de cientos de hectáreas de tierra, en diferentes lugares y estaciones, de manera que pueda asegurarse el abastecimiento de los mercados globales para una gran variedad de productos y a lo largo de todo el año. Cada vez con mayor frecuencia, la cadena, gobernada desde estos gigantes de la agroalimentación, incluye entre sus componentes entidades de negocios, que a su vez arriendan, como un *input* más, el suelo a los propietarios y organizan y coordinan las diferentes tareas a realizar subcontratando con empresas que se encargarán de las distintas fases que componen el proceso de «fabricación», preparación y transporte de los productos agrícolas hasta ponerlos en los mercados de consumo. Los complejos agroganaderos funcionan también con esquemas que implican múltiples piezas localizadas en diferentes territorios y que van desde la producción de granos y elaboración de piensos, hasta la fabricación de productos cárnicos, integrándose las diferentes operaciones a escala global.

Nos encontramos así próximos a lo que se ha dado en denominar «empresa virtual» o «corporación vacía», que supone formas de hacer dinero gobernando, controlando y gestionando la cadena de mercancías y/o servicios, pero sin hacerse cargo de los eslabones, o, de entre ellos, reteniendo sólo los asociados a la apropiación de mayor valor añadido. El capital global, «financiarizado», trata así de liberarse de los lastres y limitaciones que impone el mundo real, en busca de posibilidades de expansión ilimitadas. En esta búsqueda, los nudos de la red quedan subordinados al proyecto estratégico del conjunto, y la flexibilidad debe interpretarse como capacidad de los elementos que componen esta red para adaptarse a las necesidades del grupo, definidas desde el centro neurálgico del mismo. Una adaptación que viene facilitada también por la posibilidad de reconfigurar de manera casi permanente el entramado utilizado y las rela-

ciones que tienen lugar dentro del mismo, contribuyendo todo ello a hacer posible el desplazamiento o la externalización de costes y riesgos y la privatización o internalización de ventajas externas.

De este modo se inundan los mercados mundiales con alimentos que se dicen «de ninguna parte» (Mc Michael, 2002), pudiendo ahora ser manejada la adscripción territorial de los procesos desde estrategias globales que condicionan la «localización» de las diferentes piezas que componen el puzzle agroalimentario, construyéndose, incluso, o cambiándose «artificialmente» las «ventajas comparativas» –ahora *ventajas absolutas*– a partir de decisiones sobre la localización y el tratamiento de los diferentes nudos de la red. Esta estructura proporciona la posibilidad de utilizar los distintos territorios de la manera más «eficiente», de modo que el capital global tiene ahora la posibilidad de «optimizar» el aprovechamiento de las condiciones específicas de lo local. En este sentido, como se ha subrayado en otro lugar (Delgado 1998), los territorios son ahora utilizados con mayor intensidad que nunca, de modo que la llamada «desterritorialización» debe ser entendida como falta de compromiso o enraizamiento del capital con los lugares concretos (1) y no como desvinculación entre procesos económicos y territorio, porque, por un lado, la globalización, «como estrategia para el control (y no la supresión) de la diversidad, supone una estrecha articulación con las especificidades locales» (Veltz, 109) y, por otro, las implicaciones (2) territoriales en los lugares de localización de los procesos económicos son de una gran trascendencia. Se conforman así plataformas o enclaves agroexportadores que suponen sistemas locales de extracción y apropiación de riqueza en los que tiene lugar una explotación intensiva de recursos y especificidades locales en función de estrategias que, desde lo global, gobiernan la dinámica que condiciona los procesos que acontecen en el interior de estos sistemas productivos locales (Pedreño, 2001; Delgado y Aragón, 2006).

De este modo, a la segregación de espacios asociada al modelo de la «revolución verde» vigente en la etapa anterior, ha seguido, como consecuencia de una profundización en la división espacial del trabajo, y la consiguiente asignación, de un modo cada vez más selectivo, de cultivos a territorios, un fuerte proceso de especialización pro-

(1) Así se entiende este término en un principio, cuando comienza a hablarse de desterritorialización del capital (De Mattos, 1990), aunque después se le haya podido asociar al «fin de los territorios», (Badie, 1995), como si las dinámicas económicas en la globalización pudieran considerarse en su desenvolvimiento indiferentes a o fuera de la dimensión territorial.

(2) Implicaciones que afectan a dimensiones significativas no sólo en el ámbito de lo económico, sino en el de lo cultural y lo político.

ductiva muy por encima de las fronteras estatales, con la consiguiente quiebra de la autosuficiencia alimentaria dentro de éstas. Esta fuerte concentración y asociación entre espacios y cultivos conforma los nudos de la red alimentaria global, contribuyendo también la agricultura a la configuración de una «economía de archipiélago» (Veltz, 1999), como proyección territorial de un modelo, en el que, junto a tramas y redes por las que discurren los flujos asociados a la fragmentación y especialización productiva propias de la agricultura globalizada, se sumergen amplios espacios excluidos de los circuitos y nudos de valorización del capital. En la Unión Europea, esta fuerte especialización territorial se traduce en una importante concentración espacial de producción y cultivos, –el 80 por ciento de la misma se localiza en centros agroalimentarios como París-Basin, (trigo), East Anglia (cereal), Emilia Romagna (leche) y Holanda (cultivos hidropónicos) (Whatmore, 1995)–.

Por otra parte, el carácter creciente de materia prima que tiene la producción agraria dentro del sistema agroalimentario contribuye a su progresiva desvalorización, traducida en la evolución, tendencialmente decreciente, de los precios de los productos agrarios. La propia posición que la agricultura ocupa en una cadena de valor cada vez más larga y compleja la sitúa en una posición de desventaja, si se tiene en cuenta que en la medida en que nos alejamos de las primeras fases de elaboración el valor monetario asociado a los distintos eslabones va creciendo más que proporcionalmente, de modo que quienes se posicionan en las últimas fases están en mejores condiciones para apropiarse del valor añadido generado a lo largo del proceso (Naredo y Valero, 1999). De manera creciente, esta capacidad de apropiación se asocia con la distribución, eslabón éste que ha experimentado un proceso de concentración empresarial aún más intenso que el experimentado en el sector transformador, y hacia el que se ha desplazado claramente el centro de gravedad de la cadena alimentaria en los últimos decenios (Sanz Cañadas, 1997; Konefal, y otros, 2005). La Gran Distribución controla hoy más del 80 por ciento de la comercialización de alimentos en los países industrializados, y desde su creciente poder de negociación a partir del manejo de grandes volúmenes de mercancías y márgenes muy acotados, y de toda una logística de organización, fija las condiciones de venta, presiona los precios a la baja, y consigue mayores aplazamientos de pagos y mejores condiciones de entrega, a la vez que aprovecha la competencia entre espacios y empresas proveedoras para obtener una parte mayor en la apropiación del valor generado en la cadena agroalimentaria.

A este menoscabo del valor de los productos agrarios se añade el derivado del uso en el sistema económico de criterios de valoración reducidos a lo monetario que no tienen en cuenta dimensiones, daños y costes sociales y ecológicos esenciales para el mantenimiento de la vida en los lugares donde se localiza la actividad agraria. En el caso de los recursos naturales implicados en los procesos de producción agroalimentaria, el coste al que se valora su uso viene a ser el de extracción y manejo de los mismos, y no el coste físico o el de reposición, de modo que estos recursos son cedidos por la naturaleza y tomados de ella gratuitamente, como podemos constatar en casos como el del agua o el suelo, favoreciéndose desde este criterio de valoración el deterioro del patrimonio natural del medio rural donde se localizan estos procesos. (Naredo, 2006). A estos elementos se suma la necesidad en el sistema de consumir alimentos baratos, de mantener el nivel de precios agrarios dentro de unos límites que no resulten «molestos» para la competitividad de los territorios, habida cuenta del papel de la alimentación como un coste que puede influir en el nivel salarial de las economías implicadas. Si a todo lo anterior se une el crecimiento de los gastos en consumos intermedios, el resultado será una reducción muy sensible de la agricultura como fuente generadora de ingresos en el medio rural.

Los productores agrarios se ven así sometidos a fuertes presiones que provienen de fuerzas que en gran medida escapan a su control, en medio de una intensa competencia que se desenvuelve a escala mundial, tendiendo a desvincularse de la actividad agraria directa para ocuparse de tareas de gestión y coordinación en explotaciones que incorporan nuevas formas de organización y responden en su funcionamiento crecientemente a criterios empresariales. Incluso en las pequeñas explotaciones familiares asociadas con las «nuevas agriculturas» de producción intensiva articuladas en la globalización se produce, claramente, este tránsito hacia la gestión empresarial (Friedland, 1994).

Al mismo tiempo, tiene lugar una transferencia de esta capacidad empresarial, o capacidad para controlar las variables técnicas y económicas de la explotación «desde al agricultor o ganadero que establece relaciones contractuales o de integración hacia la empresa que actúa como «polo» integrador de la cadena», de tal manera que el agricultor queda convertido en un «asalariado a domicilio» de la empresa agroindustrial» (Arnalte, 1997: 514), o, en todo caso, en un «autómata» que se dedica a mezclar los ingredientes de una receta diseñada y elaborada con componentes cada vez más lejanos y ajenos al conocimiento y el entorno en el que el agricultor se desenvuelve.

Esta falta de encadenamientos locales de una actividad agraria crecientemente integrada, hacia atrás y hacia delante, en un complejo sistema agroalimentario, asemeja el uso del territorio al que se hace en economías de enclave, en las que el espacio es un mero soporte de los costes sociales y medioambientales generados por el funcionamiento del modelo, forzándose la producción a costa del deterioro patrimonial de estos espacios.

Se propicia de este modo la dualización, no sólo del medio rural y los espacios agrarios, sino también de las estructuras productivas que se localizan en su interior, de modo que el 20 por ciento de las explotaciones concentran un 80 por ciento de la producción y las subvenciones, en los países de la OCDE (McMichael, 1999), en un proceso en el que se acentúan las ventajas para las explotaciones más competitivas, mientras crecen las dificultades para un resto, progresivamente excluido de los mercados. La profundización de estas tendencias polarizadoras es la que lleva a esperar en la unión Europea (Agenda 2000) una «drástica» disminución del número de explotaciones y del empleo para los próximos años en la agricultura. En este contexto, la persistencia de la explotación familiar muestra una fuerte capacidad de adaptación a las exigencias productivas, aunque las que prosiguen, articuladas en el proceso de globalización, emplean un creciente volumen de mano de obra asalariada, implicándose cada vez menos el grupo familiar en la explotación, de modo que la divisoria entre agricultura capitalista y agricultura familiar aparece cada vez más difusa (Arnalte, 1997). Por otra parte, la explotación familiar se encuentra inmersa en una crisis permanente, «como consecuencia de su incapacidad para reproducirse a partir de sus propias bases materiales y sociales, situándose en una relación de dependencia-subordinación con respecto a las relaciones dominantes» (Bretón y otros, 1997: 660). Muchos de estos pequeños agricultores se han visto obligados a vender sus tierras y proletarizarse o emigrar, acentuándose la pobreza rural y reduciéndose la capacidad de la población del medio rural para alimentarse. En Europa, el número de explotaciones ha decrecido de manera importante en los últimos 25 años, pasando de 8 a 5 millones, representando esta reducción la eliminación de casi la mitad de las explotaciones pequeñas y muy pequeñas (Motura y Mignone, 1991). Este proceso ha llevado, sólo en el año 1999, a 200.000 agricultores y 600.000 ganaderos a abandonar la tierra (Gorelicks, 2000).

A pesar de que sólo un porcentaje relativamente pequeño de la producción agrícola mundial es objeto de comercio internacional, y aunque el centro neurálgico de estos flujos esté localizado en los paí-

ses de la OCDE, los efectos de la globalización tienen prácticamente un alcance generalizado, profundizándose las relaciones asimétricas entre territorios a escala mundial. Porque la centralidad de los flujos agroalimentarios –el 80 por ciento del comercio mundial, procede y tiene su destino en estos países (FAO, 2005)– expresada en términos dinerarios, debe ser matizada a partir de la consideración de la dimensión física de los flujos internacionales. Por una parte, los países centrales importan del Tercer mundo un volumen creciente de productos agropecuarios; por otra, la remuneración que estos territorios perciben por sus exportaciones agropecuarias es decreciente en términos unitarios (Naredo y Valero, 1999). Si a esto añadimos una profundización en la especialización primaria, agropecuaria y/o extractiva, de los países del Tercer Mundo, y su dependencia de los mercados del Norte tanto en la venta de sus productos agrarios de exportación –destinados a ellos en un 80 por ciento– como en cuanto al origen de las importaciones de estos productos, también procedentes del Norte en la misma proporción, completamos un cuadro en el que las implicaciones y la propia naturaleza del intercambio desigual quedan en gran medida ocultas por el velo de lo monetario.

El caso de la soja en Latinoamérica puede resultar ilustrativo a este respecto. En el corazón de América del Sur, se ha localizado la mayor plataforma agroexportadora del planeta; entre Brasil y Argentina, 36 millones de hectáreas, se dedicaron en 2004 a obtener 81,3 millones de t de soja. Una superficie y una producción que se han multiplicado por 2,2 y 2,7 respectivamente desde 1990 (Faostat, 2005). Actualmente tenemos aquí localizada casi la mitad de la producción mundial de soja (46,5 por ciento), destinada, en su gran mayoría, (90 por ciento) a la exportación para la alimentación animal y la producción de carne consumida por el Norte (3). De este modo, la capacidad productiva de la Unión Europea ha podido ir mucho más allá de los límites que impondrían sus recursos territoriales, al apoyar la «fabricación de carne» en una cría sin suelo, que tiene lugar de manera intensiva con recursos importados. A escala global, la cría intensiva de ganado exige casi la mitad de la producción mundial de grano, en un mundo donde la quinta parte de la población humana no tiene alimento suficiente. En un proceso de conversión energéticamente muy poco eficiente: «para obtener un kilo de proteína de origen animal, en las sociedades industriales, empleamos entre tres y

(3) China está también apareciendo como un país importador de soja cada vez de mayor importancia.

veinte kilos de proteína de origen vegetal que podrían consumir directamente los seres humanos» (Riechman, 2000: 208).

En Brasil, los corredores de la soja avanzan hacia el área amazónica, y los campos cultivados sustituyen a la sabana, en un proceso de deforestación que ha afectado a una gran variedad de ecosistemas únicos de los que han desaparecido casi 30 millones de hectáreas en los últimos 10 años. En Argentina se han visto afectados espacios como la selva de Yungas, sistema ecológico muy frágil, que ha sido deforestado en más de un 70 por ciento. Procesos que conllevan, entre otras implicaciones no menos importantes, pérdidas irreversibles en términos de biodiversidad. A estos efectos hay que añadir la degradación y pérdida de suelos, que lleva a su abandono ante el declive de la fertilidad y su sustitución por otros nuevos con los que continuar alimentando el modelo. Esta pérdida de calidad del suelo se traduce en la «exportación» de miles de toneladas de nutrientes naturales –nitrógeno, fósforo y potasio–, incorporados a los granos que salen de esta plataforma agroexportadora. Para «recuperar» esta pérdida, los agricultores deben pagar cantidades crecientes como consecuencia del aumento en la aplicación de fertilizantes sintéticos (Pengue, 2002). A la vez que crecen los daños, crece también el negocio. Por esta vía, la transferencia de agua adquiere dimensiones importantes, de modo que, siendo el cultivo de soja altamente demandante de agua, –2.300 a 2.800 litros por kilogramo–, lo que se ha denominado exportación de agua virtual viene a suponer anualmente más de 6,5 veces el consumo de agua en España (4). A esta degradación de los recursos hay que sumar los efectos del uso intensivo de agroquímicos, entre ellos el glifosato, herbicida de amplio espectro y alta toxicidad asociado al uso de semilla transgénica resistente al mismo, –ambos suministrados por Monsanto–, y cuya utilización se ha multiplicado en una proporción mucho mayor que la propia producción de soja (5).

Los impactos sociales de este modelo amplían la resonancia de sus costes ecológicos de manera considerable. La economía y el empleo de estas grandes áreas de monocultivo dependen prácticamente de la soja, y esta ocupación del territorio supone la exclusión de gran parte de la población del espacio y los medios para desarrollar otros cultivos. Los campos de soja demandan muy poco empleo –uno por cada 200 hectáreas cultivada–, de modo que el modelo desplaza a más de 10 trabajadores rurales por cada uno que encuentra empleo.

(4) Estimado en 30.400 hm incluyendo todos los usos.

(5) El uso de glifosato se multiplicó en la Argentina por 150 en 10 años (Pengue, 2003).

Por otra parte, la concentración creciente del tamaño viable de las explotaciones –aproximadamente 500 ha en 2004– deja a los pequeños agricultores claramente en fuera de juego. De modo que, a medida que la soja avanza, el campesinado y los cultivos para la subsistencia local retroceden. El resultado del proceso es un importante desplazamiento de la población del medio rural, un empobrecimiento progresivo del mismo, intensificación de los movimientos migratorios hacia las grandes áreas metropolitanas o al exterior, y extensión de la pobreza, la desnutrición y el hambre en territorios y países paradójicamente especializados en la producción agroalimentaria.

La cadena, hacia atrás y hacia delante, está controlada por corporaciones transnacionales cuyas operaciones van desde la producción de semillas y el suministro de paquetes tecnológicos completos, con frecuencia a través de contratos integrados (Monsanto, Syngenta, Dupond), hasta la exportación y transformación (Archet Daniels, Bunge, Cargill, Dreyfus), en un contexto en el que los productores ven su capacidad de decisión reducida al mínimo y los territorios y sus recursos físicos y humanos, en competencia entre sí, son puestos a disposición de intereses ajenos y lejanos a los de las poblaciones locales (Informe CCFD y otros, 2006). Los Estados, mediante la reforma del sector agrícola, políticas fiscales y crediticias, políticas de formación, orientación de la investigación pública, construcción de megaproyectos de infraestructura, han tratado de facilitar las condiciones de competitividad de sus territorios haciendo causa común con las agroindustrias en favor de la expansión de la soja.

Mientras los países periféricos en los que se localizan las plataformas agroexportadoras orientan sus recursos al abastecimiento de los mercados del Norte, sus economías se ven penetradas por los productos procedentes de las agriculturas del Norte, que continúan siendo apoyadas y subvencionadas mediante mecanismos diversos que soslayan las exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Infraestructuras, educación, investigación y experimentación agraria son «soportes a la competitividad» que fortalecen las posibilidades de la agricultura del Norte en los mercados globales en un contexto en el que el nivel global de subvenciones en los países de la OCDE ha aumentado en los últimos años (Etxezarreta, 2006). En esta economía globalizada, el concepto de seguridad alimentaria ha sido «revisado», desplazándose de la escala estatal a la global; desde los países centrales se propugna como fuente de abastecimiento alimentario el mercado mundial, dentro de una tendencia a la apertura y liberalización de los mercados y al desarme de la

protección de la producción agraria, propiciado por las corporaciones transnacionales del sistema agroalimentario global y amparada por la OMC.

Con la globalización se intensifican las pautas que rigen el comportamiento de la agricultura industrial, consolidada como una pieza en el engranaje del sistema alimentario global. En esta etapa, el camino de la modernización agraria ha supuesto una profundización en esa triple separación que describíamos para la etapa anterior. Por una parte, enajenación en el ámbito del conocimiento y la tecnología, en cuanto a la utilización de paquetes tecnológicos alejados de experiencias arraigadas en lo local, diseñados y contruidos desde la lógica de la acumulación; privación de dominio reforzada por el desplazamiento a un «no lugar» en el que ese conocimiento ajeno a las condiciones locales se utiliza para interpretar el entorno más próximo (Escobar, 2000), a lo que se añade la apropiación y privatización de un patrimonio genético ahora utilizado en función de los intereses del capital global. En segundo lugar, se acentúa el papel de enclave de una agricultura cada vez más dependiente de suministros externos y orientada crecientemente a mercados alejados de lo local, viéndose los pueblos cada vez más alejados de la capacidad para decidir sobre su alimentación. Por último, la mercantilización y privatización de los recursos naturales, subsumidos y orientados en su uso, cada vez en mayor medida, por la lógica de la acumulación, amplifica la ruptura entre naturaleza y sociedad (6).

3. LÍMITES DE LA CATEGORÍA MERCADO DE TRABAJO RURAL

En lo que se refiere al trabajo, una de las primeras cuestiones que suscita el título de este artículo es la pertinencia y vigencia que tiene en la actualidad la categoría «rural» como espacio de significación social, económica y política para hablar de la disponibilidad de la fuerza de trabajo y la actividad.

Como ya hemos manifestado en otras publicaciones (Gavira, 2000 y 1995), la categoría rural en el campo de significación de la ciencia occidental nace marcada negativamente como «lo que no es *moderno*». Así las actividades que están especialmente vinculadas a este espacio, relacionadas con la agricultura, ganadería, masas forestales, artesanías, industria o comercio local, tanto como la cultura de las personas que viven y trabajan en estos territorios se consideran *tradi-*

(6) *Todo este proceso de enajenación o separación de la agricultura de su entorno da lugar a una actividad cada vez más hipotecada energéticamente (Carpintero y Naredo, 2007).*

cionales en los discursos modernizadores dominantes de la posguerra y el fordismo triunfante. Se trata de unas actividades que en razón del progreso «necesitan» de políticas territoriales de desarrollo para modernizarse, casi siempre planteadas desde la lógica del crecimiento económico, ya que el indicador del que se parte en el ranking desarrollista son las rentas medias y las infraestructuras de esos territorios, resultando este balance negativo al compararlo con el obtenido por los centros de desarrollo urbano-industriales. Desde las teorías de la modernización y el progreso dominantes en la interpretación de las desigualdades territoriales, la actividad rural se considera separada de la urbana; se trata este espacio y las formas de producir asociadas al mismo como el lugar de donde proceden los recursos y la fuerza de trabajo para la industria. Tanto es así, que en muchas de las investigaciones realizadas sobre el trabajo en el mundo rural, las actividades que no entran en las categorías de análisis industriales y sus formas de gestión dominantes, ya sean centradas en las perspectivas funcionalistas de organización del trabajo o en las marxistas del proceso de trabajo, no se consideran más que los aspectos que pueden ser adaptados a esos paradigmas urbano-industriales (7).

La promoción del «agrobussines», la proliferación de agriculturas intensivas en capital basadas en el uso de nuevas tecnologías e insumos industriales, así como en nuevas formas de organización de los procesos de trabajo, la crisis del modelo fordista, los procesos de deslocalización industrial en los diferentes Estados, la promoción política de la pluriactividad traducida como oferta turística y de ocio en la primera etapa de reestructuración liberal, ponen en cuestión para determinados espacios de los países desarrollados la lectura mecanicista de las zonas rurales como zonas «no desarrolladas» o «no modernizadas». Se hace explícita de este modo una nueva segmentación territorial de las zonas rurales, que divide y tiende a polarizar social y económicamente a estos territorios y a los grupos sociales que en ellos viven, dependiendo de cuál sea el modo de articulación con los mercados internacionales, complejizando aún más la interpretación de la actividad en las zonas rurales. Así, mientras en algunos espacios rurales de los países ricos y algunos periféricos, junto al tradicional negocio familiar conviven la gran empresa multinacional, las cooperativas de productores o franquicias de empresas internacionales de servicios ligadas al negocio inmobiliario, la industria

(7) *Para una mayor profundización de estos debates ver Gavira, L. 1993 y 2002; Castillo, J. J. 1998.*

agroalimentaria o turística, ganando población, por el contrario, en la mayoría de las zonas rurales, la población activa disminuye y envejece abrumadoramente, las explotaciones se descapitalizan, los servicios disminuyen y la población que queda se ve obligada a recurrir a una diversificación de funciones que van más allá de las agropecuarias para cubrir sus necesidades básicas, siendo objeto –en el mundo desarrollado– de políticas proteccionistas que tratan de mantener los pobladores de estas zonas como «cuidadores del campo» para disfrute de los ciudadanos urbanos.

Esa compleja división del trabajo se amplía aún más, aumentando considerablemente las desigualdades, cuando se trata de la relación entre áreas rurales de países ricos y las de los pobres, sometidos a los dictados liberales de los organismos económicos y financieros internacionales (FMI, OCM, Banco Mundial) viendo impotentes cómo aumenta su deuda exterior y empeora la calidad de vida de los pobladores de zonas rurales, a los que se disciplina orientando la economía a la exportación para pagar la deuda externa. En esta etapa no sólo los hechos, también los discursos dominantes sitúan lo rural y las actividades desarrolladas en estos territorios como dependientes de lo urbano.

Pero serán los efectos de la globalización neoconservadora, que se hacen sentir especialmente desde finales de los años noventa, los que marquen un nuevo sentido a los discursos sobre lo rural, no tanto en términos descriptivos o analíticos, subrayando los procesos de hibridación de actividades rurales y urbanas (de servicios) que propicia el modelo dominante de globalización tecnológica y el espacio virtual, sino como espacios subordinados pero interdependientes políticamente de las zonas urbanas en los que la exclusión en la toma de decisiones que afectan a las formas de vida y los recursos naturales de su territorio, de forma más o menos violenta, va a ser el rasgo general que despierte la conciencia de subordinación y las acciones a ella asociadas.

El análisis de la actividad de la población rural así considerada adquiere relevancia y pertinencia para ser grupo diana, tanto de los discursos académico-científicos como de las políticas dirigidas a cumplir el principio de igualdad de oportunidades, ya sea en los países en los que se dan democracias liberales, en los denominados «emergentes» o en los países pobres.

La toma de conciencia sobre la intensificación de las relaciones de desigualdad campo-ciudad y de territorios centrales y otros con diferentes grados de articulación y dependencia de los mercados globales (Chase Dum, 1989) deriva de distintas razones: en primer lugar,

de las propias estrategias planificadas desde la lógica económica dominante, como externalización de la actividad posfordista, búsqueda de viejos y nuevos recursos naturales para el consumo urbano, la expansión de las TIC o la industria biotecnológica, para las que adquieren un valor estratégico. En segundo término, de efectos «colaterales no deseados» desde lo *políticamente correcto*, ya sea como fuerza de trabajo barata, recurso para la guerra, población enferma, población pobre excluida en las zonas periféricas de las grandes urbes. También en muchos casos es resultado de la constatación de la escasez de recursos naturales o de los precios del consumo que se genera.

Estas contradicciones del modo de articulación rural-urbano aumentan el grado de sensibilización sobre la polarización económica entre zonas rurales; por ejemplo, fenómenos como la inmigración o la pobreza hacen que afloren para una parte de la opinión pública las diferencias que ha experimentado la frontera norte de África con Europa, separada apenas por una decena de kilómetros, que es la más desigualitaria del planeta y cómo esta diferencia ha aumentado en los últimos años (Estefanía, 2006) (8).

4. TENDENCIAS DOMINANTES EN EL TIPO DE ACTIVIDAD EXISTENTE EN LAS ZONAS RURALES

Las dinámicas del modelo neoliberal de globalización dominante orientan una serie de pautas que inciden en el tipo de actividad que se desarrolla en las áreas rurales. Entre otras, por su especial relevancia cabe citar las siguientes tendencias:

- Tendencia a la concentración vertical de los procesos productivos, comerciales y financieros que implican una gestión global del trabajo, lo que conduce a:
 - La introducción en el sector agrario de variedades genéticas modificadas de crecimiento rápido que, por un lado, inundan los mercados de forma masiva haciendo caer los precios, y, por otro, colonizan las tierras de los pequeños agricultores generando dependencia del complejo agrobioquímico y financiero, llevándolos al endeudamiento continuo y la necesidad de producir más para solventar las deudas, a emplearse ocasionalmente, al

(8) Estefanía, J. (2006): *África, el eslabón menos avanzado. Agenda global. El País. Edición Nacional de 28 de mayo.*

éxodo rural o la emigración de parte de los miembros de la familia.

- Empobrecimiento de las familias campesinas y abandono de muchas de ellas de las tierras, debido a la imposibilidad de competir en los mercados internacionales. Esto afecta a la disponibilidad para el trabajo de todos los miembros de la familia que han de poner todos sus efectivos a disposición del mercado, favoreciendo formas de trabajo atípicas que propician un aumento de la informalización de las diferentes formas de estar en la actividad.
 - La reducción de la renta y de la estabilidad del trabajo en zonas rurales, debido al empeoramiento de las condiciones salariales y laborales por la dificultad de que surjan organizaciones que regulen el trabajo.
 - Incremento de la movilidad funcional y, especialmente, territorial de la fuerza de trabajo con costes sociales y humanos importantes para los trabajadores (9) (Informe ONU, 2006). Esta movilidad en forma de migración sigue dos flujos fundamentales: en los países pobres y emergentes el flujo de personas de las zonas rurales a las ciudades y de éstas a los países ricos en un entramado mundial de redes étnicas. De otro, el flujo de capitales a través del negocio que supone la inmigración irregular para determinados grupos, cuyos beneficios redundan a través del blanqueo de dinero en las zonas de potencial económico de los países ricos y emergentes, donde la seguridad financiera es mayor.
- Mercantilización de saberes, procesos y recursos bionaturales de libre asignación (piratería biológica), de un lado, y, por otro lado, desmercantilización por parte de las grandes corporaciones de segmentos de la producción no compatibles con la lógica extensiva del mercado, lo que supone:
- Privatización de saberes comunitarios que aumenta la dependencia exterior y provoca procesos reactivos catalizadores de la identidad colectiva ante la expropiación, especialmente, por parte de los grupos más vinculados con el cuidado doméstico (mujeres) o pertenecientes a organizaciones reivindicativas (ONG, profesores, chamanes...) que propician revueltas de resistencia, ejemplos de ello pueden ser el movimiento global de la

(9) Naciones Unidas dice que los movimientos migratorios se incrementarán en los próximos años en el mundo.

plataforma campesina, los grupos de mujeres indias organizadas en defensa del patrimonio forestal comunal o de académicos y chamanes latinoamericanos (ver Sevilla, 2006; Shiva, 2002; Alternatives sud, vol. XIII, n.º 4, 2006).

- Especialización agroalimentaria para satisfacer las demandas del mercado internacional con la consiguiente pérdida de diversidad e incremento de los costes energéticos, que aumentan las demandas de suministros localizados en esas áreas y generan un mayor interés por el control de los mismos al más bajo coste, dando lugar a un incremento de la violencia (como ejemplo pueden citarse los problemas en Latinoamérica derivados del control de la producción de hidrocarburos en países como Ecuador, Venezuela o Bolivia).
- Encarecimiento de los recursos sanitarios para la población de países pobres que disminuye sus posibilidades de supervivencia y la disponibilidad para el trabajo de las personas jóvenes, las más afectadas por enfermedades derivadas de la pobreza y el SIDA, dando lugar en algunos casos a movimientos de resistencia e insumisiones a las normativas derivadas de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
- Aparición de nuevos espacios para formas atípicas de trabajo (sumergido, autoempleo) vinculadas con la producción orientada a mercados locales y regionales en los segmentos abandonados por las grandes explotaciones agroalimentarias. Éste sería el caso de variedades de viñedos o de producción vitivinícola de pequeños y medianos productores en denominaciones de origen como el Sherry tras ser absorbido el sector por las grandes corporaciones del negocio del vino y los espirituosos; o de productos recuperados en riesgo de desaparición como, por ejemplo, la quinoa, producción de origen indígena sustituida en Latinoamérica por cereales, quedando en riesgo de extinción, hasta que un grupo de campesinos, con el respaldo de las ONG que vinculan la calidad del producto con la sostenibilidad y el desarrollo de la diversidad alimentaria o el comercio justo, como Vía Campesina, Slow Food, Intermon Oxfam..., han conseguido su supervivencia y hacerse un espacio en el mercado tanto local como el asociado a productos altamente energéticos vinculados a los consumos de deportistas y defensores de dietas saludables. También sería el caso de nuevas formas de empresas agroecológicas y/o artesanales, a veces agrupadas en organizaciones que llegan a los mercados de las grandes urbes occi-

denciales [ver Sevilla, 2006; Terra Madre, 2006; web Intermon Oxfam (10)].

- Virtualidad-deslocalización de los procesos de organización y control del trabajo en el ámbito global con la aparición de redes transnacionales articuladas de forma nodal y territorialización-polarización de la ejecución de los procesos de trabajo:
 - Esto orienta las formas de organización y control de los territorios hacia los intereses de las grandes corporaciones y no a la mejora de la calidad de vida y trabajo de los ciudadanos. Por ejemplo, el aumento de la desintegración económica en Latinoamérica está teniendo graves consecuencias para la creación de puestos de trabajo vinculados a la organización, control de la producción y el mercado: la participación de la zona en el comercio mundial ha pasado de un 12 por ciento en los años cincuenta a un 6 por ciento en los años sesenta y a un 3 por ciento en la actualidad; los flujos comerciales interregionales son los más bajos del mundo, situándose en el 22 por ciento (la UE supera el 60 por ciento y el sudeste asiático llega al 50 por ciento); el continente tiene la distribución de renta menos igualitaria del planeta por lo que a pesar del crecimiento económico (o más bien debido al crecimiento económico articulado con otros centros político-económicos) existen más de 220 millones de pobres, habiendo aumentado el desempleo desde el *Consenso de Washington* en todos los países, especialmente para las mujeres y jóvenes (11). También se repite este fenómeno en África donde, según los últimos informes de la OCDE sobre *Las perspectivas económicas de África*, a pesar de llevar creciendo tres años por encima del 5 por ciento como media, con una inflación algo superior al 7 por ciento, baja para la zona, incluso existiendo países con superávit fiscal primario, los africanos siguen padeciendo una pobreza extrema. Mientras «*los chinos penetran en el mercado africano en búsqueda de materias primas de las que adolecen, desde la medina de Dakar hasta las minas de Zambia, pasando por las plataformas petrolíferas de Sudán y los mercados de Gabón, que hacen entrar a África en la globalización*» (12), subordinada habría que añadir.
 - La entrada en vigor de los Acuerdos Generales sobre el Comercio de los Servicios (AGCS), elemento clave de la OMC en su

(10) www.intermonoxfam.org.

(11) Estefanía, J. (2006): *AL: los paisajes de la (des)integración*. Agenda global. El País. Edición Nacional de 7 de mayo.

(12) Estefanía, J. (2006): *África, el eslabón menos avanzado*. Agenda global. El País. Edición Nacional de 28 de mayo.

estrategia de globalización de los servicios para dismantelar los servicios públicos, es otra dimensión que se ha de considerar porque sus efectos van más allá de la globalización de la producción agraria e industrial, que ha venido afectando al empleo de los municipios intermedios de los países desarrollados, sobre todo. La aplicación de este acuerdo supone la liberalización del empleo terciario existente en los municipios rurales de la UE, una estrategia que se ha iniciado bajo el auspicio de las directrices de «modernización de las administraciones públicas» en sectores como los servicios sociales, el empleo, la formación o la salud. La aprobación de las propuestas permitirá a los grandes grupos empresariales de servicios de salud, educación, personales y asistenciales, digitales o de investigación, especialmente peligrosos en la denominada «Sociedad del Conocimiento» en la medida que a través de nuevas formas de organización no gubernamentales o mediante empresas multinacionales se validarán y legitimarán las estrategias de «buenas prácticas» mediante las que se incorporan esas políticas (Gavira y González, 2004; Gavira, 2004), dejando una vez más excluidos a los habitantes de las zonas rurales de la gobernanza (13) de esas políticas, por lo que perderán calidad al no tener criterios fundamentados desde sus intereses vitales sobre qué es un buen servicio, ni opciones alternativas con control democrático (14).

- Aumento progresivo de la salarización, como resultado de la pérdida de poder adquisitivo de los grupos domésticos y las nuevas expectativas de consumo, que lleva a las familias rurales a poner a disposición del mercado toda su fuerza de trabajo disponible, aunque según la OIT (2005), la población no asalariada sigue siendo aún mayoritaria en el medio rural. Kofi Annan, en relación a los movimientos migratorios, dice que «630 millones de personas (el 10 por ciento de la población mundial) quieren entrar en la globalización como productores y consumidores» (15). Esto hace comprender el papel estructural que está jugando y jugará la inmigración en el modelo vigente de glo-

(13) Gobernanza es el concepto utilizado por el Consejo de Europa de Estrasburgo para referirse al control democrático de las políticas y los políticos. Ver Gavira y González, 2004.

(14) Alguien tan poco sospechoso como J. Chirac de veleidades radicales dice «...la importancia, para el crecimiento y el empleo tanto en Francia como en Europa, de concretizar con diligencia los compromisos tomados por el conjunto de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en particular por los países emergentes, en el sector de la industria, de los servicios y de la propiedad intelectual».

(15) Kofi Annan III Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Avanzados celebrada en Bruselas en mayo de 1971.

balismo, lo que lleva a la necesidad de una regulación global de los mercados desde otra lógica efectivamente sostenible, de lo contrario los conflictos y la violencia derivados de la mala distribución de la riqueza y el esquilamiento del planeta serán inexorables.

- Protagonismo del concepto «seguridad alimentaria» en las reivindicaciones campesinas que aglutina la nueva realidad del mundo rural y hace coincidir las demandas de los campesinos con la de los consumidores globales conscientes de los riesgos para la vida y el trabajo de la nueva situación de liberalización desigual de los recursos, la producción y el consumo.
- Nueva rearticulación política de las alianzas del mundo de la producción y el trabajo campesino con los consumidores, como resultado de la toma de conciencia de los riesgos por una parte de la población: principio de precaución ante los OGM, privatización del capital genético o del agua, etc. Hay movimientos sociales globales como Slow Food que han incorporado el concepto de «coproductor» para aludir a esta nueva alianza, en la medida que el consumidor, especialmente en los países ricos, tiene una enorme fuerza para orientar la demanda productiva en el ámbito de la alimentación.

Todo ello conduce a la necesidad de repensar el mundo del trabajo desde las personas y su medio como «*seres vivos hablantes*» (autorreflexivos), volviendo a situarlo en el lugar que les corresponde en cuanto a los fines de la vida desde una visión *glocalista* para los ciudadanos del mundo (Bauman, 2001). El trabajo, por tanto, sigue teniendo una importancia central, pero no deja de ser un medio para vivir mejor y no un fin en sí mismo o un simple factor de la producción, como se suele considerar desde la gestión económica dominante en el globalismo, pues desde esa consideración se termina perdiendo la dimensión ecológica, social y humana de la que el trabajo es portador.

La OIT, aun partiendo de una concepción económica y funcional del trabajo, reconoce la dimensión global desde la que actualmente se institucionaliza, diciendo que «*Las reglas actuales por las que se rige la globalización, que son la aplicación de la lógica de la liberalización creciente en todas las esferas de las políticas económicas y sociales, nos impulsa hacia un mercado laboral global, aun cuando éste siga estando muy fragmentado... Esto plantea la cuestión de la elaboración de normas adaptadas a un mercado laboral global*» (OIT, 2006), Para ello se hace una apuesta

por promover oportunidades para el «trabajo decente» (16), haciendo explícito que «el trabajo no es una mercancía».

Sin embargo, autores reconocidos como A. Mattelart (2002) o M. Castell (1998), entre otros, apuntan el riesgo de tomar como referente sólo la globalización para regular los mercados, llamando la atención de la fuerte carga de coartada ideologizadora de la que es portadora este concepto para alejar las posibilidades de control, sobre todo porque según este último autor el trabajo realmente globalizado ajustado en tiempo real parece ser entre el 10 y el 20 por ciento del total, llamando la atención sobre el peso de los mercados locales.

Efectivamente, la coartada de la globalización está aumentando las condiciones de desigualdad en los procesos de producción y control del trabajo y está cambiando las lógicas de consumo dominantes, dividiendo a los trabajadores y separándolos de su condición de ciudadanos y consumidores en torno a la competitividad global. Por ello, resulta muy difícil regular sólo desde propuestas o recomendaciones normativas, sin cambiar las condiciones de producción y reproducción de las relaciones laborales.

Las posibilidades de control por parte del trabajo son tan débiles que sin considerar un cambio de paradigma en las relaciones de estructuración, esta apuesta no parece realista, ya que el grado de concentración de poder en las grandes empresas terminan imponiendo las formas de regulación que les interesa. En ese sentido, hablar de mercado de trabajo o de trabajo decente desde una perspectiva institucional parece una falacia *políticamente correcta*. Sobre todo, porque el tiempo juega en contra de la vida y los logros sociales obtenidos en parte del planeta. Por ello, habría que reconsiderar la pertinencia de seguir utilizando el concepto «mercado de trabajo» y el de «empleo» como ejes del análisis político (Prieto, 1994; Gavira, 2002, 1999, 1998), para plantear la gobernanza de la gestión del trabajo en la *globalización* (17), especialmente para el mundo rural donde la diversidad de situaciones y condiciones de vida y trabajo, así como las formas de hibridación nuevas que propicia la globalización ponen en cuestión la viabilidad de este

(16) *El concepto de Trabajo Decente fue formulado por los mandantes de la OIT, gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores, como una manera de identificar las prioridades de la Organización y reformar y modernizar su enfoque para el siglo XXI. El Programa Trabajo Decente es un programa práctico, con raíces en el mundo real y basado en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, de democracias que producen para las personas y crecimiento económico que aumenta las posibilidades de trabajos productivos y el desarrollo de las empresas. Es un enfoque integral que establece relaciones entre diferentes áreas políticas. Juan Somavia, Dr. Gral. de la OIT. Boletín de noticias de la OIT. 2005.*

(17) *Entendemos por globalización las formas de estructuración de las estrategias globales a nivel local, ver más en referencia al uso de este término en Gavira, 2002.*

concepto nacido en el mundo rico e industrial: No se cumplen los requisitos de «libre competencia» y las formas de articulación territorial y social de la oferta y demanda del trabajo productivo y reproductivo, en los ámbitos públicos y privados, junto con las nuevas formas de interpenetración de estas categorías de análisis tradicionales, hacen de este concepto una metáfora con contenidos y significados muy diversos, pero con resultados muy rentables para el discurso liberal dominante. Por ello, siguiendo algunas de las aportaciones de la mirada feminista y del pensamiento ecosociológico (Durán, 1991, 1995; Ibáñez, 1997; Gavira, 1999), parece más pertinente utilizar como referente del análisis la categoría de «calidad del tiempo y condiciones de vida y trabajo», para obtener una comprensión más ajustada de las implicaciones sociopolíticas y las posibilidades de acción referidas al trabajo, especialmente en el medio rural en el que los ritmos de la naturaleza, incluida la de los trabajadores/as, se perciben de forma más certera que en las ciudades. Esto supone tratar de rearticular de nuevo las formas de producción con las de consumo desde un principio de dignidad humana frente a las lógicas abstractas que se le suponen al mercado o al conocimiento científico.

5. CONDICIONES LABORALES Y GLOBALIZACIÓN

La OIT (2006) inicia el preámbulo del informe sobre los cambios del trabajo sintetizando una serie de condiciones generales sobre el mundo del trabajo que son aplicables también al trabajo rural y aumentan la preocupación por la calidad de vida:

- Se está observando un paulatino crecimiento de las tendencias proteccionistas. El impulso de liberalización del comercio y los capitales se ha debilitado.
- Actividades empresariales normales, como son la externalización, la reubicación o las inversiones en el extranjero, son objeto de críticas crecientes porque crean empleo «en el extranjero».
- Se exige con firmeza un mayor control de las migraciones, en ocasiones con matices de xenofobia cada vez más importantes.
- Las elecciones se ganan y se pierden por cuestiones ligadas al número y la calidad de los empleos, pero la credibilidad de los gobiernos para cumplir las promesas formuladas está descendiendo, cualquiera que sea su inclinación ideológica.
- Se observa un aumento de las distintas formas de violencia pasiva y activa que reducen los espacios para el diálogo, la resolución de conflictos y la creación de consenso.

- La respuesta a la necesidad de convertir al trabajo decente en un objetivo global está ocupando un lugar cada vez más destacado en los programas políticos nacionales, regionales y mundiales. Y tenemos que entender claramente de qué manera está cambiando el mundo del trabajo y cómo podría configurarse para responder a la exigencia popular de trabajo decente, que se plantea todo el mundo.

Estas conclusiones sobre la necesidad de un trabajo decente, implican el reconocimiento de que actualmente dominan unas condiciones de trabajo «indecentes», lo que queda en evidencia en otro informe realizado por la OIT (2006), donde se ofrecen una serie de indicadores que describen un panorama, cuanto menos, preocupante sobre las condiciones de vida y trabajo de las personas vinculadas al sector agrario. En este informe se recoge la dificultad de cuantificar de forma certera el trabajo mundial, insistiendo que son precisamente las zonas rurales donde se encuentran las mayores dificultades por la falta de registros fiables y de dispositivos orientados a este fin, sin embargo, se han elaborado una serie de indicadores que tienen el valor de mostrar lo que puede ser la parte más visible de las condiciones de trabajo en las que viven los más pobres del planeta:

La mitad de la fuerza de trabajo mundial se concentra en el sector agrícola. Pero tres cuartas partes de la gente más pobre del mundo vive en áreas rurales de países en desarrollo, dependiendo a menudo de los ingresos familiares procedentes de la agricultura, (OIT, 2006).

Considerando que la situación y las circunstancias laborales es lo que más incide en la pobreza, como se dice en el mismo informe, es necesario reflexionar sobre la importancia que tienen las condiciones de vida y trabajo en el medio rural para la sostenibilidad social y ecológica globales, incluyendo al mundo urbano.

Los países donde existen minifundios suelen tener una mayor proporción de la agricultura en manos de pequeños agricultores que trabajan por su cuenta. Allí donde la agricultura está más comercializada, existe una proporción más elevada de trabajadores asalariados. El empleo asalariado está creciendo: de los 1,3 mil millones de mujeres, hombres y niños que trabajan en la agricultura, 450 millones son asalariados, por lo que los asalariados son más de un tercio (35 por ciento) de la fuerza laboral agrícola mundial.

Las mujeres representan más de la mitad de la mano de obra agrícola, siendo las grandes perdedoras y explotadas en la globalización, pues al trabajo como asalariadas suman las tareas domésticas y,

muchas veces, la elaboración de artesanía, la venta o la producción para el autoconsumo. A ello se suma que, en muchos casos, sufren trabajo forzoso y explotación sexual o prácticas abusivas vinculadas con tradiciones culturales que las discriminan en la percepción del salario e imposibilitan la igualdad de oportunidades con los hombres por falta de legislación protectora (OIT, 2006).

Como madres también sufren la explotación del trabajo de sus hijos, con las consiguientes consecuencias en términos de salud para ellos y de demandas de trabajo doméstico para ellas. En el sector agrícola se da la mayor tasa de trabajo infantil de todos los sectores: el 70 por ciento de los niños que trabajan en el mundo lo hacen en la agricultura, sector, que no hay que olvidar, que ha sido uno de los que más pronto se ha visto afectado por la globalización.

A las dificultades de medir el trabajo asalariado mundial, se suma que muchos hombres y mujeres de los hogares que desarrollan actividades agrícolas por cuenta propia también suelen trabajar fuera de la explotación con carácter ocasional a fin de completar los ingresos familiares. Se dispone de escasa información fiable respecto de la proporción de este tipo de trabajo ocasional, pero parece que cuantitativamente es importante, existiendo algunos estudios, como el realizado en México en el año 1990, que apuntan a que puede haber hasta un 80 por ciento de agricultores que realizan trabajos estacionales ocasionalmente (Plant, 1993) y sigue aumentando en la medida que se reduce la renta campesina ante la competencia de las grandes corporaciones.

En la actualidad, en las zonas rurales de los países desarrollados coexisten en algunos territorios el «agrobussines» organizado con el «buscavida» que subsiste en los márgenes del mercado, dándose además una enorme movilidad sectorial estacional (agricultura, construcción, servicios vinculados al turismo o los servicios personales) entendida ésta en el sentido tradicional, pues otro de los rasgos que se han acentuado en la globalización vigente es que los procesos de externalización de las grandes empresas para abaratar costes y los modelos de subcontratación, franquicias, etc., están haciendo que parte de los procesos de trabajo que antes se computaban estadísticamente dentro del sector agrario, como el mantenimiento y reparación de maquinaria, limpieza, transporte, marketing, administrativos... actualmente se subcontratan, bien a organizaciones externas, bien a empresas distintas controladas por los mismos accionistas, dando como resultado una disminución cuantitativa del trabajo agrario, ahora asignado al sector servicios, cuando en realidad sólo ha cambiado la forma organizativa de control del mismo.

También los procesos de urbanización del campo y el turismo están cambiando los perfiles de la actividad rural en determinadas zonas del planeta.

La incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos de intensificación agraria llevada a cabo en diferentes áreas rurales, especialmente en las desarrolladas, está provocando una taylorización de las tareas, haciendo que el ritmo de las máquinas imponga los ritmos de trabajo, descualificándolas y rompiendo los esquemas de control y seguridad que tradicionalmente se derivaban de la realización del trabajo a partir de la constitución de cuadrillas. Esto genera también una mayor desprotección ante los riesgos de accidentes laborales al hacerse éste más monótono y rutinario, además de dar lugar de nuevo a formas de remuneración basadas en la productividad en vez de salario/hora, lo que provoca también una mayor visibilidad de los menos dotados que lleva a la penalización por parte del grupo, ahora menos cohesionado en su conformación como cuadrilla en torno a la moral tradicional del trabajo (el valor de la unión y «el cumplir», ver Gavira, 1993). Estos aspectos se acentúan cuando se trata de trabajadoras mujeres o inmigrantes, que debido a la falta de cultura de clase o de documentación ven disminuidas sus posibilidades de ejercicio del derecho laboral, contribuyendo a una progresiva desregulación y quiebra del poder de negociación colectiva del trabajo, pues la subordinación a los empleadores implica además que se les relegue a aquellas tareas que son menos valoradas o incluso despreciadas (Gavira, 1993; Pedreño, 1998/99).

A pesar del continuo e importante éxodo rural y del discurso «moderno» sobre la disminución del trabajo agrario, las tendencias actuales indican que cerca de un tercio de la fuerza laboral mundial aún trabajará en la agricultura en 2015.

Otra característica del trabajo rural es que éste se ha hecho más intensivo por unidad de tiempo, lo que está suponiendo un mayor gasto de energía en la que hay que incluir la energía humana, con el consiguiente desgaste en términos de salud.

Están creciendo en el mundo rural, aunque aún de forma no significativa, nuevas ocupaciones relacionadas con los procesos de trabajos vinculados a la sociedad informacional y las nuevas tecnologías. Los puestos nuevos ocupan a teleoperadores, sobre todo mujeres, especialmente en «países en vías de desarrollo»; personal de servicio para solventar el *know how* de la digitalización de los procesos derivados de la puesta en marcha de la gobernanza en los países desarrollados, vinculados en muchos casos a las administraciones locales; mucho menos significativos, pero relevantes por las redes de nuevos

servicios e influencia que generan, son los puestos de alto nivel, consecuencia de la instalación en el medio rural de ejecutivos que trabajan en empresas multinacionales conectados a través de Internet y el transporte aéreo con las sedes centrales, que buscan calidad de vida y naturaleza, a la vez que conocen de cerca los usos culturales de poblaciones diversas que pueden utilizar como nuevas competencias para su trabajo.

Paralelamente a esa dinámica, se están generando en el medio rural bolsas de descualificación y falta de competencias para los cambios que la sociedad de la información requiere (18). Esto ha generado una abundante literatura sobre «infoexclusión» (19) (Rodríguez Victoriano 2005; Gavira y González, 2004; Gavira, 2004) que afecta a una gran parte de la población de las áreas rurales. Uno de los problemas en este ámbito es que el discurso sobre la promoción de la sociedad del conocimiento, que apuesta por las autopistas de la información como ejes de desarrollo, como en la etapa del desarrollismo se hacía con las del transporte terrestre, se hace desde una cultura de uso urbano muy tecnologicista. Esta ha terminado por naturalizarse como si fuera la única posible, siendo utilizada por las élites globalizadas en el discurso tecnocéntrico de «la aldea global» (Vasudeva Rao, 2006). Este uso tecnologicista deja fuera a todos aquellos grupos que no las asumen como el único camino posible o que desarrollan otras culturas de uso más adecuadas a sus intereses que las que se tratan de imponer desde los grupos dominantes. Sin embargo, como apunta A. Mattelart (2002), hablar de *autopistas de información*, en sociedades donde faltan los caminos para acceder a los bienes más primarios en realidad está sirviendo, sobre todo, como coartada política no contrastada, para la disciplina y el control social con base a las necesidades de competitividad, desmovilizando la capacidad de respuesta colectiva.

Paradójicamente, mientras se mantiene un discurso dominante sobre los beneficios del conocimiento para la democracia y para la justicia social, se está dejando en manos de las grandes plataformas digitales, que forman parte de los grandes holding, la instalación de

(18) Esta falta de cualificación no hay que leerla sólo en términos de falta de habilidades técnicas para el uso de las TIC, sino en relación a la capacidad de identificar las propias necesidades e intereses personales y colectivos, cuestión básica para operar en un mundo en el que los mensajes sobre la competitividad se globalizan dejando fuera las realidades concretas.

(19) El concepto de Infoexclusión alude a un conjunto de procesos complejos. Una realidad que en ocasiones añade una nueva dimensión al proceso o conjunto de procesos que caracterizan la realidad multifactorial y multidimensional de la exclusión social; y, en otras, puede suponer en sí misma una nueva y potente forma de exclusión social. En este sentido, hay que entender que la definición que aquí presentamos del concepto de Info-exclusión supone un primer acercamiento analítico a dicho proceso (Rodríguez Victoriano, 2005).

las infraestructuras y el diseño de los dispositivos. de forma que son los ciudadanos quienes han de adaptarse a los requerimientos de competencias y precios que aquellas imponen y no al revés. Con ello el acceso real a las nuevas tecnologías de la información (Gavira y González, 2005) y el conocimiento queda bastante restringido a las estrategias empresariales.

Esta falta de compromiso real por un uso más democrático de las TIC se ha venido denunciando centrandó el debate sobre los resultados, «brecha digital» entre territorios y grupos sociales, como consecuencia del dominio absoluto del mercado, es decir, de las grandes corporaciones sobre los ciudadanos, que ha llevado al fracaso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en 2005 desde la perspectiva de los países pobres, aunque habría que hablar también de «brechas digitales», que son enfrentadas desde diferentes lógicas políticas también en los países desarrollados, según de qué zonas rurales se trate, pues por lo general estas zonas también cuentan con pocos recursos en este campo como señala CH. Peyer (2006).

En lo que afecta a las condiciones de seguridad en el trabajo, según el citado informe de la OIT (2006), actualmente, la agricultura es una de las tres ocupaciones más peligrosas a nivel mundial junto con la construcción y la minería. Los accidentes en el lugar de trabajo se cobran la vida de 170.000 trabajadores agrícolas cada año. La tasa de accidentes mortales en la agricultura duplica a la de los demás sectores de actividad, lo que es aún más alarmante, dado que el sector es uno de los menos transparente para este tipo de estadísticas y aun así, hay registrados 40.000 trabajadores agrícolas que mueren al año por exposición a plaguicidas.

También como resultado de la mala calidad de las condiciones de trabajo, las comunidades agrícolas más pobres se enfrentan a numerosos obstáculos añadidos, siendo uno de los más presentes el efecto debilitador de la malnutrición y la enfermedad, para acceder tanto a insumos como a mercados que podrían generar mayores ingresos. La discriminación, que a menudo reviste distintas formas, es una realidad social para muchos hombres y, especialmente, mujeres de los grupos indígenas u otros grupos étnicos.

Según el informe citado, uno de los efectos de la globalización en la gestión del trabajo es que se está produciendo un incremento de los riesgos laborales debido a la insalubridad e inseguridad en la producción agraria por el uso de productos químicos sin la suficiente protección, aunque en los sectores agroalimentarios, debido a la sen-

sibilidad de la opinión pública en los países ricos, se produce una intensificación de los controles sobre calidad en los procesos de trabajos relacionados con la manipulación agroindustrial para el consumo en grandes superficies comerciales. Esto se hace, si embargo, sobre la base de un control y articulación vertical de los procesos de trabajo, que para los trabajadores se traduce en una mayor taylorización de las tareas de manipulación hortofrutícola, que si bien trata de contemplar medidas de seguridad en el lugar de trabajo, la rutina y la monotonía terminan generando falta de atención y de seguridad efectiva.

Todo lo dicho está provocando un incremento de la debilidad organizativa en el mundo del trabajo rural del globalismo, que termina incidiendo en el aumento de la pobreza. Por ello, para escapar de la trampa de la pobreza rural, según la OIT (2006), no sólo se necesita inversión en infraestructuras y educación –casi siempre orientada desde los intereses de los países ricos–, se requiere, sobre todo, un importante esfuerzo para desarrollar organizaciones colectivas de trabajadores y pequeños agricultores, tales como cooperativas u otras formas de organizaciones colectivas, que puedan asumir la representación de los más pobres en el proceso de formulación de las políticas de desarrollo rural sostenible y proporcionarles servicios esenciales, tales como seguro de salud, créditos, semillas reproducibles, fertilizantes y herramientas al por mayor, así como mejores y más justas estrategias y técnicas de comercialización y consumo.

Cuando se compara la población activa agraria con la que trabaja en otros sectores económicos, se observa que muchos trabajadores agrícolas están insuficientemente protegidos por las legislaciones laborales de sus respectivos países. Según la OIT (2006), el papel regulador efectivo que puede tener la legislación laboral en la agricultura está estrechamente relacionado con los modelos de propiedad de la tierra, el tamaño de las explotaciones y el alcance de la comercialización. Aunque como se dice en el propio informe, *«todos los trabajadores agrícolas del mundo padecen discriminación, condiciones de trabajo peligrosas, escasa remuneración y falta de protección social»*. El modelo urbano-industrial desde el que se han inspirado las regulaciones laborales hace que en bastantes ocasiones la agricultura esté excluida de la cobertura de la legislación laboral, pues la propia cuestión del tamaño de las explotaciones hace que muchos empleadores agrícolas queden al margen de su aplicación.

Uno de los factores más importantes que está contribuyendo a esta situación de desregulación derivada de la máxima flexibilidad articulada con los ciclos de la naturaleza en la globalización es, en el

caso del mundo rico, el carácter ocasional, estacional o temporal de gran parte de los trabajadores, cada vez más móviles en razón de las demandas estacionales y territoriales de los mercados, lo que hasta cierto punto puede explicar la falta de protección legal suficiente.

La necesidad de un importante volumen de fuerza de trabajo disponible puntualmente y las nuevas formas de gestión glocal del trabajo, permite la contratación de trabajadores sin especialidad reconocida, que no encuentran espacios en otros sectores. Para estos trabajadores las campañas agrícolas son una forma de subsistencia, especialmente, en el caso de la población inmigrante. Esto hace que muchos trabajadores agrícolas sean migrantes perpetuos, que se adaptan a los ciclos de las cosechas en distintas regiones y países extranjeros, en los que no se les reconocen los derechos adquiridos y aun siendo muy funcionales a los intereses de los empresarios, se los excluye prácticamente del disfrute de los derechos básicos. En Europa y América del Norte gran parte de la labor de las cosechas, que exige una utilización intensiva de la mano de obra, se lleva a cabo recurriendo a grupos de trabajadores procedentes de países con menores ingresos.

Por otra parte, la localización remota y aislada de las tareas agrícolas hace que la labor de los inspectores de trabajo resulte especialmente difícil de llevar a cabo (OIT, 2006). En algunos países en los que las grandes explotaciones tienen una significativa presencia, la falta de aplicación de la ley en las áreas rurales crea un vacío en el que los ejércitos privados, el crimen y el bandidaje están incontrolados, lo cual exacerba la inseguridad y vulnerabilidad que impide a las comunidades salir de la pobreza mediante el trabajo. Este es el caso de muchos países de África o América Latina.

6. LAS PROPUESTAS POLÍTICAS

Según la OIT, *«las estrategias globales concebidas para que los trabajadores agrícolas y otros trabajadores rurales logren un trabajo decente deben convertirse en un elemento importante a efectos de la reducción de la pobreza»*, aunque esta organización afirma que *«el crecimiento económico mundial no se traduce en la generación de los empleos de calidad necesarios para avanzar hacia la reducción de la pobreza»*.

Esta tendencia mundial se manifiesta en forma diversa al considerar indicadores como la creación de empleo, la productividad, las mejoras salariales y la reducción de la pobreza en las diferentes regiones del mundo. *«El mensaje principal es que, hasta ahora, la cuestión de la seguridad en el empleo y de los ingresos para los trabajadores del*

mundo no ha sido una prioridad al momento de diseñar las políticas» (20). Por ello la OIT hace una propuesta sobre «*la necesidad de lograr que el trabajo decente para todos sea un aspecto central de todas las políticas económicas y sociales*»; sin embargo, los medios que propiciarían la regulación del trabajo en esa dirección cada vez aparecen más alejados, dado el proceso de individualización creciente, cuando no desaparición, de las relaciones laborales que propicia el actual modelo globalizador.

En zonas como África y en algunas partes de América Latina se observa un número creciente de personas que trabajan cada vez en condiciones menos favorables, en particular en el sector agrícola. Según los Indicadores Cuantitativos del Mercado de Trabajo de la OIT (ICMT), para millones de trabajadores, los nuevos empleos apenas proporcionan ingresos que permitan superar el umbral de pobreza, o bien se encuentran muy por debajo de lo que cabría calificar de trabajo satisfactorio y productivo. En el último decenio, el número total de trabajadores que viven con menos de dos dólares al día no ha descendido y sigue siendo de 1380 millones, aunque proporcionalmente representa algo menos del cincuenta por ciento del empleo mundial, lo que supone una disminución respecto de 1994 (57 por ciento).

En ese informe se subraya que en muchas economías en desarrollo, el problema radica principalmente en «*la falta de oportunidades de trabajo decente y productivo, y no en el desempleo*». Las mujeres y los hombres trabajan duro y con horarios prolongados a cambio de muy poco, ya que si no trabajan no perciben ningún ingreso y las formas tradicionales de complemento de renta a través de las economías de subsistencia están seriamente amenazadas porque se trata de poner todos los recursos en el mercado y se pierde la tierra.

Así puede constatarse el fracaso del tipo de globalización vigente para el desarrollo humano y las reacciones incontroladas (entrópicas) que propicia. Estas contradicciones están actualmente en el centro del cambio del modelo neoconservador, que ha pasado de una estrategia de control basada en la violencia simbólica sobre la base de la gestión mundial de lo político, a nuevas formas de violencia directa a través del negocio de la guerra con la coartada del terrorismo y la inseguridad ante la opinión pública, dejando tras de sí serias dudas sobre la legitimación de la apropiación de recursos naturales que

(20) Juan Somavia, Director General de la OIT en el Boletín de noticias de la OIT: viernes 9 de diciembre de 2005 (OIT/05/48).

conlleve y la circulación de capitales que posibilita este negocio de las guerras: las intervenciones en Oriente próximo, los intentos de control en Latinoamérica o la venta de armas en las guerras africanas han sido denunciados por diferentes instituciones.

Ante la violencia ejercida a partir de la gestión económica y las lacras que está generando, en el año 2001, la OIT ha adoptado el *Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura* (núm. 184), en el que se proporciona un marco para establecer y poner en práctica políticas nacionales sobre la seguridad y la salud en el trabajo agrícola. Este convenio proporciona orientaciones acerca de las medidas preventivas y de protección relacionadas con los principales peligros a los que hacen frente los trabajadores agrícolas: la seguridad de la maquinaria, la manipulación y el transporte de materiales, la gestión de las sustancias químicas, la manipulación de animales y la construcción y mantenimiento de las instalaciones agrícolas. Otras disposiciones abordan la protección de los trabajadores jóvenes, los trabajadores temporeros y estacionales, y de las trabajadoras antes y después de dar a luz; en otras se subraya la necesidad de contar con seguros contra lesiones y enfermedades, así como con equipamientos de tipo social.

Esto se plantea en el contexto del discurso sobre la sostenibilidad, que, como diferentes autores han señalado, es un término lo suficiente ambiguo como para aglutinar las tendencias ideológicas más diversas (García, 2004). Desde la interpretación de la OIT el objetivo de la agricultura socialmente sostenible se basa en la noción de que las personas que trabajan la tierra y sus familias deberían poder ganar lo suficiente para llevar una vida digna y que tanto ellos como sus familias deberían gozar del respeto a los derechos y libertades fundamentales. Asimismo, significa que deberían contar con acceso a la atención de salud, la educación para sus hijos y la protección en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Así, para que el ejercicio de la agricultura sea socialmente sostenible se proponen considerar las siguientes características:

- Brindar empleo, ingresos y seguridad alimentaria adecuada a quienes se ganan la vida trabajando la tierra.
- Erradicar el trabajo forzoso y la explotación de los niños y de otros miembros vulnerables de la sociedad.
- Garantizar condiciones de trabajo seguras y sanas, incluido un horario de trabajo apropiado con adecuados períodos de descanso.
- Informar a los trabajadores acerca de la utilización segura y eficaz de la maquinaria.

- Proporcionar una formación adecuada y un equipamiento seguro a quienes transportan, manipulan y aplican o eliminan plaguicidas y otros agroquímicos.
- Garantizar que se atienden las necesidades relativas al bienestar de los agricultores y los trabajadores agrícolas. Entre ellas, la atención de salud, los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la seguridad social.
- Contar con el apoyo de políticas nacionales integradas sobre la seguridad y la salud en el trabajo, la protección del medio ambiente y el desarrollo rural.

Sin embargo, todos estos aspectos se quedan sólo en una lista de buenas intenciones si no se reconsideran, se reformulan y regulan a nivel global los flujos de poder que orientan el motor del crecimiento económico y las formas de conocimiento en la sociedad informacional (Castell, 2000). Para ello es necesario replantearse los límites de las formas de producción y consumo desde el paradigma de la ecorresponsabilidad social, política y de gestión del conocimiento. Como apunta B. Santos (2003), la nueva estructura que genera la sociedad informacional reclama una práctica social que derive en un *conocimiento emancipador*, lo que supone una nueva ruptura epistemológica que se sumaría a las tres rupturas epistemológicas habidas en la ciencia: una primera desde donde se «*construye a la ciencia moderna contra el sentido común dominante (un conocimiento pre-juicioso, conservador mistificado y mistificador); la segunda ruptura dibuja los límites de la ciencia clásica y se abre al paradigma de la complejidad; la tercera de carácter cualitativo dirige el conocimiento científico al sentido común, lo informa científicamente y lo transforma en un nuevo sentido común de carácter emancipador. En esta tercera ruptura se explicita la dimensión política del conocimiento científico y reflexivamente asume en su integridad que todo conocimiento es una forma de actuar con efectos políticos y sociales. Asume la politización del conocimiento científico (...)*» (Rodríguez Victoriano, 2005: 11)

Así pues, la progresiva complejidad de la actividad y las formas de conocimiento de la misma, los procesos de organización y control del trabajo de los habitantes de las zonas rurales y su relación con los de las urbanas lleva a una tendencia hacia la hibridación del tiempo de trabajo y el tiempo de vida, que el modelo industrial moderno había separado: la proletarianización campesina y las nuevas formas de control y externalización del trabajo están impulsando una tendencia a la vuelta del trabajo al domicilio familiar, asumiendo el trabajador los costes de infraestructura y mantenimiento, especialmente en el mundo desarrollado y en los países emergentes, salvo en aquellos

espacios rurales en los que el trabajo en pequeños talleres o fábricas se articulan en grandes redes o forman un entramado orientado al mercado comarcal o regional, articulados con empresas de servicios. En el resto de las áreas rurales el neofordismo propicia la salarización a través de grandes explotaciones orientadas a la exportación, donde la división entre espacio de trabajo y vida se hace tan dura para los trabajadores expropiados de las tierras como en los primeros años del capitalismo industrial.

La conciencia sobre los límites de este modelo hace pertinente preguntarse por la vigencia del principio productivista y positivista marxiano del trabajo como fuente de todo valor, dado los costes tangibles e intangibles de las formas de producción y consumo dominantes. De ahí que cada vez más aumente la preocupación por los aspectos cualitativos y termodinámicos relacionados con la producción y el consumo, que se transfieren a las formas de trabajar. Desde estas miradas resulta impensable asumir un principio de valor universal ajustado a cualquier ecosistema; parece más pertinente incorporar la diversidad a través del nuevo paradigma de un conocimiento emancipador, capaz de actualizar y regular dialógicamente los intereses en las nuevas condiciones que se derivan de la sociedad informacional.

Considerar la calidad y dignidad del tiempo de vida y trabajo como fuente de todo valor, no sólo desde la interpretación productivista y etnocentrista de occidente, sino desde las dimensiones ecológicas y culturales que permitirían una sostenibilidad glocal basada en los límites desde el principio de precaución y el mantenimiento de una vida digna, requiere cambiar los sistemas analizadores del trabajo para elaborar nuevos indicadores acordes con la realidad de los límites informacionales y termodinámicos que le afectan en los ecosistemas en que se desarrolla la actividad desde una mirada holográfica. Esto conectaría con el paradigma del conocimiento emancipador y la ecorresponsabilidad que requiere la urgencia del glocalismo, en la que la construcción del territorio y lo político se hace contando con los agentes implicados en el mismo, desde una lógica que articula la diversidad y las contradicciones de las relaciones: global-local, campo-ciudad, producción-reproducción, centralización-participación, articulación horizontal-vertical de la gobernanza, conocimiento-acción. Todo ello supone nuevas alianzas entre agentes sociales territorializados además de un cambio cultural y civilizatorio que anteponga la exploración a la explotación (Ibáñez, 1997), que apueste por la vida y su diversidad como fuente de todo valor, ya que de ella depende la supervivencia del sistema en su conjunto.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTERNATIVES SUD (2006): *Etat des résistances dans le Sud – 2007*. Vol. XIII, n^o4. Centre Tricontinental. Louvain la Neuve.
- ARNALTE, E. (1997): «Formas de producción y tipos de explotaciones en la agricultura española». En: Gómez Benito, C. y González, J. J. (eds): *Agricultura y Sociedad en la España contemporánea*. CIS y MAPA
- BADIE, B. (1995): *La fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l'utilité sociale du respect*. Ed. Fayard.
- BAUMAN, Z. (2001): *La Sociedad individualizada*. Edit. Cátedra. Madrid.
- CASTELLS, M. (2000): *La era de la Información. La sociedad red*, Madrid, Alianza.
- CASTELLS, M. (1998): «Globalización, tecnología, trabajo, empleo y empresa». *La Factoría*, 7. octubre.
- CASTILLO, J. J. (1998): *A la búsqueda del trabajo perdido*. Tecnos. Madrid.
- CONSTANTE, D. H. y HEFFERMAN, W. D. (1994): «Las empresas transnacionales y la globalización del sistema agroalimentario», en Bonanno, A. *Globalización del sector agrícola y alimentario*. Secretaría General Técnica. Ministerio de Agricultura y Pesca.
- CARPINTERO, O. y NAREDO, J. M. (2006): «Sobre la evolución de los balances energéticos de la agricultura española, 1950-2000». *Historia Agraria*, 40.
- CHASE-DUNN, Ch. (1989): *Global formation: structures of the world economy*. Blackwell. Oxford.
- DE MATTOS, C. (1990): «Reestructuración social, grupos económicos y desterritorialización del capital. El caso de los países del cono sur», en *Revolución tecnológica y reestructuración productiva: impactos y desafíos territoriales*. Alburquerque, F.; De Mattos, C.; Jordán, R. (Editores). ILPES/ONU, IEU/PUC y Grupo editor Latinoamericano.
- DE SOUSA SANTOS, B. (1998): *La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación*, trad. de Cesar Rodríguez, Bogotá, ILSA (Instituto Latinoamericano de Servicios Legales), Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colombia.
- DELGADO CABEZA, M; ARAGÓN MEJÍAS, M. A. (2006): «Los campos andaluces en la globalización. Almería y Huelva fábricas de hortalizas». En Etxezarreta (coord.): *La agricultura española en la era de la globalización* Ministerio de Agricultura y Pesca. En prensa.
- DELGADO, M. y MÁRQUEZ, C.: «La estructura agroalimentaria en Andalucía. Especialización productiva y estructura empresarial». En Grupo AREA, *Globalización en Industria Agroalimentaria en Andalucía*. Ed. Mergablum.
- DELGADO, M. (1998): «La globalización ¿Nuevo orden o crisis del viejo?» Desde el Sur. *Cuadernos de Economía y Sociedad*, 1. Universidades de Sevilla y Málaga.
- DURÁN, M.^a A. (1995): «Invitación al análisis sociológico de la contabilidad nacional». *Política y Sociedad*, 19.
- (1991): «El tiempo en la economía española». *Información comercial española, Revista de Economía*, 695.

- ESCOBAR, A. (2000): «El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?». *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Edgardo Lander (comp.) Consejo Latinoamericano de Ciencias sociales. Buenos Aires.
- FAO (1998): *Estado de los recursos filogenéticos del mundo*. Roma.
- FAO (2005): *El Estado de la Agricultura y la alimentación*. Roma.
- Faostat: (2006) <http://faostat.fao.org/site/340/DesktopDefault.aspx?PageID=340>
- FINE, B.; HEASMAN, M. y WRIGHT, J. (1996): *Consumption in the age of affluence. The world of food*. Ed. routledge.
- ETXEZARRETA, M. (2006): «Tendencias de evolución de la agricultura al principio del siglo XXI». *La agricultura española en la era de la globalización*. Ministerio de Agricultura y Pesca. En prensa.
- FRIEDMAN, H. y McMICHAEL, Ph. (1989): «Agriculture and the State-System: The rise and decline of national agricultures, 1870 to the present». *Sociología Ruralis*, vol. 29 (2) (2000).
- GARCÍA, E. (2004): *Medio Ambiente y sociedad. La civilización y los límites del planeta*. Alianza ensayo.
- GAVIRA, L. (2004): «Digitalización de la sociedad y gobernanza: El papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el acceso de los ciudadanos a los servicios». *Boletín Temático Nuevas Tecnologías de la Comunicación, ALAIC* (Revista de la Asociación Latinoamericana de Investigación de la Comunicación), 17, junio-julio. Año IV.
- GAVIRA, L. (2002): *Andalucía sobreviviendo en la globalización*. Mergablum. Sevilla.
- GAVIRA, L. (1999): «Mujeres, trabajos y dispositivos de asesoramiento». *Nuevas propuestas (y riesgos) de pensar el empleo femenino*. IDR, Fundación Universitaria e Instituto Andaluz de la Mujer. Sevilla.
- GAVIRA, L. (1999): «Mercado de trabajo y política de empleo en Andalucía». En Moyano, E. e Yruela, M. (coord.) *Informe Social de Andalucía (1978-1998)*. Federación de Cajas de Ahorro de Andalucía. Córdoba.
- GAVIRA, L. (1998): «Límites epistemológicos de los análisis sobre el trabajo y sus implicaciones prácticas». *Sociología del Trabajo*, Nueva época, 34. Siglo XXI. Madrid.
- GAVIRA, L. (1993): *Segmentación del mercado de trabajo rural en Andalucía*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Serie Estudio. Madrid.
- GAVIRA, L. y GONZÁLEZ, F. (2004): «The Role of New Information Technology as Regards User Involvement in Social Services». Informe para el *Intersectoral Group of Experts on e-governance* dentro del proyecto integrado «*Making democratic institutions work*» del Consejo de Europa. <http://www.coe.int/T/E/>
- GOERELICK, S. (2000): «Facing the farms crisis». *Ecologist*, 30.
- GOODMAN, D. y REDCLIFT, M. (1991): *Refashioning Nature*. Ed. Routledge.
- GÓMEZ BENITO, C. (1995): «Conocimiento local, diversidad biológica y desarrollo». *Revista de Estudios Agrosociales*, 77.
- HARVEY, D. (1989): *Las condiciones de la posmodernidad*. Ed. Amorrortu.
- IBÁÑEZ, J. (1997): «La ecología en el pensamiento social de fin de siglo». *A Contracorriente*. Edit. Fundamento. Madrid.

- IBÁÑEZ, J. (1997): «Hacia una ética de la (eco)responsabilidad». *A Contracorriente*. Edit. Fundamento. Madrid.
- KNEEN, B. (1999): «Restructuring food for corporate profit: The corporate genetics of Cargill and Monsanto». *Agricultural and human Values*, 16.
- KONEFAL, J.; MASCARENHAS, M. y HATANAKA, M. (2005): «Governance in the agro-food system: Backlighting the role of transnacional supermarket chains». *Agricultura and Human Values*, 22.
- LYSON, T. A. y LEWIS RAYMER, A. (2000): «Stalking the wily multinational: Power and control in the US food system». *Agriculture and Human Values*, 17.
- MARSDEN, T. y WHATMORE, S; (1994): *Finance Capital and Food System Restructuring: Nacional Incorporation of Global Dynamic*. McMichael (ed).
- MATTELART, A. (2002): «Premisas y contenidos ideológicos de la sociedad de la información». En Vidal Beneyto, J.: *La ventana global*. Taurus. Madrid.
- McMICHAEL, Ph. (2002): «La restructuration globale des systèmes agro-alimentaires». *Mondes en Développement*, Tome 30.
- McMICHAEL, Ph. (1999): «The power of food». *Agriculture and Human Values*, 17.
- McMICHAEL, Ph. (1998) «Globalization: Myths and Realities». *Rural Sociology*, 61(1).
- McMICHAEL, Ph. (ed) (1994): *The Global Restructuring of Agro-Food Systems*. Cornell University Press.
- MYERS, N. (coord.) (1987): *El Atlas Gaia de la Gestión del Planeta*. Ed. Herman Blume.
- NAREDO, J. M. (2006): *Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas*. Ed. Siglo XXI.
- NAREDO, J. M. y VALERO, A. (dirs.) (1999): *Desarrollo económico y deterioro ecológico*. Editores: Fund. Argentaria y Visor.
- OIT (2006): *Cambios en el mundo del trabajo*. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra.
- PEDENO, A. (1998/1999): «Taylor y ford en los campos. Trabajo, género y etnia en el cambio tecnológico y organizacional de la agricultura industrial». *Sociología del Trabajo*, 35.
- PEDENO, A. (2001): «Efectos territoriales de la globalización: el caso de la ruralidad agroindustrial murciana». *Revista de Estudios Regionales*.
- PENGUE, W. (2002): «Comercio desigual y deuda ecológica. Lo que el Norte debe al Sur». *Le Monde Diplomatique*. Ed. Cono Sur. Abril.
- PENGUE, W. (2003): *Producción agro exportadora e (in) seguridad alimentaria: El caso de la soja en Argentina*. <http://www.debtwatch.org>
- PLANT, R. (1993): *Role of rural workers' organisations in economic and social development: A case study of the ILO Convention, 141 in Mexico and the Philippines*. OIT. Ginebra.
- PÉREZ-VITORIA (2005): *Les paysans sont de retour*. Arles, Actes Sud.
- RIECHMAN, J. (2000): *Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia*. Ed. Catarata.

- PRIETO, C. (coord.) (1994): *Trabajadores y condiciones de trabajo*. Ediciones HOAC. Madrid.
- Santos, B. (org.) (2003): *Conhecimiento Prudente para una vida decente*. Porto, Edicoes Afrontamnto.
- GUHA, R. y MARTÍNEZ ALIER, J. (1997): *Varieties of environmentalism*. Essays North and South, Londres, Earthscan.
- RODRIGUEZ VICTORIANO, M. (2005): «El conflicto entre la democratización del conocimiento y la globalización de la ignorancia en el capitalismo informacional. Informar, comunicar, conocer». *Cambio cultural, problemas sociales y sociedad del conocimiento. Sociología para una Sociedad Mundial*. Simposium internacional de sociología, ISA. Zaragoza.
- SANZ CAÑADAS, J. (1993): *Industria Agroalimentaria y Desarrollo Regional. Análisis y toma de decisiones locacionales*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- SEVILLA (2006): «Agroecología y agricultura ecológica: hacia una re-construcción de la soberanía alimentaria». *Agroecología*, vol. 1: 7-18.
- SHIVA, V. (2003): *Cosecha robada. El secuestro del suministro mundial de alimentos*. Barcelona, Paidós.
- SHIVA, V. (2000): «El mundo en el límite». Giddens, A. y W. Hutton (ed.). *En el límite. La vida en el capitalismo global*. Tusquets, Barcelona.
- TERRA MADRE (2006): <http://www.terramadre2006.org>.
- TOLEDO, V. (1993): «La racionalidad de la producción campesina». En Sevilla, E. y González de Molina, M.: *Ecología, campesinado historia*. Ed. La Piqueta.
- VV.AA. (2006): *Los pies en la tierra. Reflexiones y experiencias hacia un movimiento agroecológico*, Barcelona, Virus.
- VASUDEVA RAO, B. S. (2006): «Tecnología de la información y comunicación en la alfabetización para el desarrollo rural». *Educación de adultos y desarrollo*, 66. Institut Für Internationale Zusammenarbeit. Bonn.
- VELTZ, P. (1999): *Mundialización, ciudades y territorios*. Ed. Ariel.
- VERNOY, R. (2003): *Semillas generosas*. IDRC.
- WHATMORE, S. (1995): *From Farming to Agrobusiness : The Global Agro-Food System*. En Johnston, Taylor y Watt.

RESUMEN

Agricultura y trabajo rural en la globalización

El presente trabajo consta de dos partes. En la primera se sintetizan las tendencias de la evolución de la agricultura en los últimos quinquenios, articulándose ésta como el primer eslabón dentro de la dinámica del sistema agroalimentario. En la segunda parte, después de algunas consideraciones sobre los límites de la categoría de mercado de trabajo rural, se analizan las tendencias dominantes en la actividad y las condiciones laborales en las zonas rurales, para terminar el trabajo con el planteamiento de algunas propuestas políticas.

PALABRAS CLAVE: Agricultura, sistema agroalimentario, trabajo rural, condiciones de trabajo, pobreza.

SUMMARY

Agriculture and rural work in the globalization

The present work consists of two parts. In the first one the tendencies of the evolution of agriculture in the last few decades are synthesized, articulating this one as the first link within the dynamics of the agro-alimentary system. In the second part, after some considerations on the limits of the rural labour market category, the dominant tendencies in the activity and the working conditions in the rural areas are analysed, ending this work with the exposition of some political proposals.

KEYWORDS: Agriculture, agro-alimentary system, rural work, labor conditions, social policy, poverty.